



Resolución No. CSJBOR25-866
Cartagena de Indias D.T. y C., 25 de junio de 2025

“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa: 13001-11-01-001-2025-00491-00
Solicitante: Elsy Zambrano Velásquez
Despacho: Juzgado 014 Penal Municipal de Conocimiento de Cartagena
Servidor judicial: Lina Sofía Martínez Salcedo y Álvaro Quintero González
Tipo de proceso: Tutela
Radicado: 13-001-40-09-014-2025-00-176-00
Consejera ponente: Liliana Rosa Cardona Chagüi
Fecha de sesión: 26 de junio de 2025

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de vigilancia judicial administrativa

Mediante mensaje de datos recibido el 09 de junio de 2025, la señora Elsy Zambrano Velásquez, en calidad de parte, dentro del proceso de la referencia con radicado no. 13-001-40-09-014-2025-00-176-00, presentó solicitud de vigilancia judicial administrativa contra el Juzgado 014 Penal Municipal de Conocimiento de Cartagena, debido a que, según afirma, no han emitido fallo de tutela.

1.2 Trámite vigilancia judicial administrativa

Mediante Auto CSJBOAVJ25-544 del 10 de junio de 2025, comunicado al día siguiente, se dispuso a requerir a los doctores Lina Sofía Martínez Salcedo y Álvaro Quintero González, juez y oficial mayor, respectivamente, del Juzgado 014 Penal Municipal de Conocimiento de Cartagena, para que suministraran información detallada del proceso identificado con radicado núm. 13468-40-89-001-2021-00033-00. Esto, porque al revisar el expediente en el aplicativo TYBA de la Rama Judicial, no se visualizaron las actuaciones actualizadas.

1.3 Informe de verificación

Dentro de la oportunidad para ello, los servidores judiciales rindieron informe de manera conjunta bajo la gravedad de juramento (artículo 5° Acuerdo PSAA11-8716 de 2011).

La doctora Lina Sofía Martínez Salcedo, manifestó lo siguiente:

Cartagena de Indias D.T. y C., Centro Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.
Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co
Correo electrónico: mecsjbolivar@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cartagena – Bolívar. Colombia



- i) *“(…) desempeñó el cargo de juez del Juzgado 14 Penal Municipal Con Funciones de Conocimiento de Cartagena, desde el 5 de junio de 2023 hasta el pasado 29 de mayo de 2.025, es decir, en la actualidad no estoy vinculada a dicha célula judicial”*
- ii) *“En todo caso, me permitiré rendir informe, de acuerdo a lo que conservo en mis archivos personales con respecto de la acción de tutela con radicado 13001400901420250017600, en razón a que no poseo acceso al expediente digital en la actualidad”*
- iii) *“La suscrita emitió fallo de tutela, (…) de igual manera, se subió al expediente ubicado en One Drive y se remitió dicho proveído al empleado encargado para su notificación inmediata”.*

Además, señala que no pudo realizar el registro en Tyba, toda vez que las actuaciones que le precedían, esto es, constancias de notificaciones e informes rendidos al interior del trámite constitucional, no habían sido cargados en esa fecha de la sentencia, pues dichas actuaciones se registran a través de usuario y clave de secretaria.

Así mismo, el secretario Henry Omar Castellon Vasquez, mencionó lo siguiente en su informe:

“(…) Es así, como siendo repartida la actuación en fecha 30 de abril de 2025, por auto de esa misma calenda se admitió la misma, se ordenó dar traslado de ella a las accionadas y requerirlas para que presentaran un informe sobre el asunto, además se vinculó a BIENESTAR IPS para los mismos efectos.

(…) Observa el despacho que lamentablemente a la accionante no se le pudo notificar de dichas providencias, toda vez que por error involuntario se digitó mal el correo proporcionado, puesto que se notificó al correo ezambrano@hotmail.com siendo el correo correcto ezambranov@hotmail.com. No obstante, es necesario consignar que no hubo atraso en la actuación, pues el termino de resolución de esta fue el estipulado en la ley (10 días hábiles). Ahora bien, habiéndose percatado del error se procedió de inmediato a corregir el mismo notificando en debida forma a la accionante. (...)”

Por último, el oficial mayor Alvaro Quintero González mencionó en su informe lo siguiente:

“(…) Aunado a lo anterior, me permito informar que en el tramite dado a la acción de tutela, tanto en lo que respecta al auto admisorio como a la sentencia y las solicitudes de aclaración, se hicieron por parte del suscrito los pases al despacho dentro del término de ley, lo que se puede corroborar en el expediente de la tutela, cumpliéndose a cabalidad con el debido proceso.

Por último, en lo atinente al error en la notificación inicialmente efectuada a la parte accionante, como lo indiqué en renglones anteriores, se debió a un lapsus calami



posiblemente por la carga laboral incommensurable con la que se cuenta en el despacho en materia constitucional y procesal constitucional, carga que única y exclusivamente recae sobre el suscrito, esto, atendiendo que contamos como una planta de personal muy reducida y no contamos con descongestión, ni judicantes.(...)"

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por la señora Elsy Zambrano Velásquez, en calidad de parte, dentro del proceso de la referencia, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la solicitud se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

2.2. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y que *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”*, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos actuales, porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: *“Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.



En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

2.3. Planteamiento del problema a resolver

Conforme a la solicitud de vigilancia judicial administrativa y lo informado por las servidoras judiciales, corresponde a esta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso de la actuación dentro del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que involucren un actuar u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que la solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsas de copias a la jurisdicción disciplinaria contra los servidores judiciales involucrados.

2.4. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8º, prevé dentro de las garantías procesales, el derecho de toda persona *“a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (...)”*.

Por su parte, la Constitución Política en sus artículos 29 y 229 consagran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, respectivamente, los cuales comprenden las prerrogativas que se enuncian a continuación: i) el derecho que tiene toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial, ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna, y iii) el derecho a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

La anterior consagración implica el deber de todas las autoridades de observar de manera diligente los términos y adelantar de manera oportuna los trámites judiciales de que conoce, en tanto su inobservancia y la dilación injustificada *“(...) pueden conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración en general, y a la administración de justicia en particular”*, amén de resultar lejana la efectividad de una justicia material en el caso concreto.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado también que *“el incumplimiento de los plazos judiciales tiene un carácter excepcional, pues la regla general,*

Cartagena de Indias D.T. y C., Centro Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: mecsjbolivar@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia



contenida en el artículo 228 superior, es la obligatoriedad de los términos procesales”. En ese sentido, se admite en casos excepcionales que el incumplimiento de los términos procesales no le es directamente atribuible al funcionario judicial en tanto “la mora, la congestión y el atraso judiciales son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural la administración de justicia en Colombia”.

En ese orden, con relación a la mora judicial, mediante sentencia T-052 de 2018, la Corte Constitucional precisó:

«La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

(...)

Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho, se encuentra incluida la solución célere de los asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de justicia (...).

Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: “(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”.

(...)

En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: “(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.”»

También respecto a este asunto, el Consejo de Estado ha expresado: “(...) no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si, por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial”.

Quiere decir lo anterior, que para determinar si se está o no frente a una dilación justificada, es necesario realizar un análisis valorativo y la comprobación de las circunstancias en el



caso concreto, *“juicio ciertamente complejo en el que “deben tomarse en consideración las circunstancias particulares del despacho que adelanta la actuación y del trámite mismo, entre las que se cuentan: i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, iii) la complejidad del caso sometido a su conocimiento y iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”.*

Por tanto, la omisión o dilación en el cumplimiento de los términos procesales en cuanto su relevancia constitucional está ligada a la relación intrínseca entre la carga funcional y el cumplimiento de los deberes a su cargo.

En conclusión, puede afirmarse válidamente, que de conformidad con la jurisprudencia sentada por estas corporaciones, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, y, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debido a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos.

A su turno, cuando se presenta un incumplimiento de los términos procesales, la prosperidad de las causales eximentes de sanción administrativa corresponde examinarlas en cada caso concreto. El incumplimiento de los términos se entiende justificado *“(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constatan problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución del caso en el plazo previsto en la ley”.*

Lo descrito en precedencia, fue tenido en cuenta en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, cuando en el artículo 7º dijo:

“(…) la respectiva Sala Administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate.

Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas”.



Implica lo anterior, que en el trámite de una vigilancia judicial administrativa cada caso concreto debe analizarse de manera particular y observarse las circunstancias propias del despacho vigilado así como la gestión del servidor judicial, entre esos aspectos, la carga efectiva, los ingresos efectivos y la productividad, que permitan concluir, en el evento de no acatarse el término judicial, la existencia de razones no solo que la expliquen sino que la justifiquen, pues no es admisible que frente a circunstancias objetivas de dificultad en la gestión judicial se exija el cumplimiento inexorable de los términos, pues si bien su incumplimiento es sancionable, tal hecho *“se exculpa cuando se presenta una causa extraña o cuando se desborda la capacidad física del funcionario con la cantidad de trabajo que le corresponde en ese determinado momento (...)”*.

2.5 Caso concreto

La señora Elsy Zambrano Velásquez, en calidad de parte, solicitó que se ejerciera vigilancia judicial administrativa sobre el proceso identificado con el radicado núm. 13-001-40-09-014-2025-00-176-00, que cursa en el Juzgado 014 Penal Municipal de Conocimiento de Cartagena, debido a que, según indicó, no han emitido fallo de tutela.

Con respecto de las alegaciones de la solicitante, la doctora Lina Sofía Martínez Salcedo, juez del proceso, mencionó que ya no labora en el Juzgado 14 Penal Municipal, sino en agencia judicial diferente, pero aun así explicó lo realizado en el caso en mención; no obstante, aclaró no tener acceso al expediente digital en la actualidad.

Manifestó que la setencia de tutela fue proferida en el tiempo debido. Aclarando que no pudo registrar la sentencia en el sistema debido a que no se encontraban surtidas otras actuaciones previas. Advirtiendo no recibir memoriales sobre el proceso con posterioridad.

Por otro lado, el secretario Henry Omar Castellon Vasquez subrayó que en la tutela en mención la sentencia fue emitida el 15 de mayo de 2025, siendo notificada el 22 de mayo de la misma anualidad. Sin embargo, por un error en el correo electrónico, inicialmente no se logró notificar a la accionante.

Constató que el error fue corregido, notificandose correctamente la setencia. Afirmó que no hubo retrasos y que todo se ajustó a la ley.

Por último, el oficial mayor Alvaro Quintero González explicó nuevamente el error involuntario en el correo usado para notificar a la accionante. Constató que, aunque ocurrió el error, este se debió a la alta carga laboral y escaso personal del despacho.



Examinadas la solicitud de vigilancia judicial administrativa, los informes de verificación y las piezas obrantes en el expediente digital, esta Seccional encuentra demostrado que en el trámite del proceso se surtieron las siguientes actuaciones:

No.	Actuación	Fecha
1	Recepción del trámite de tutela	30/04/2025
2	Auto admisorio de la acción de tutela	30/04/2025
3	Sentencia de tutela, donde se concedió el amparo invocado	15/05/2025
4	Notificación de la sentencia a las partes (con error al correo del accionante)	22/05/2025
5	Comunicación del requerimiento respecto a la vigilancia judicial administrativa	11/06/2025
6	Notificación de la sentencia a las partes (se notifica correctamente al correo del accionante)	13/06/2025

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se ciñe en la presunta mora en la que se encuentra incurso el Juzgado 014 Penal Municipal de Conocimiento de Cartagena en emitir el fallo de tutela.

En cuanto a las actuaciones proferidas, se tiene que la sentencia de tutela fue proferida el 15 de mayo de 2025, siendo notificada el 22 del mismo mes y año; así mismo, y al observarse el presunto yerro señalado por los servidores judiciales en su informe, se notificó nuevamente la sentencia de tutela al correo de la parte accionante el 13 de junio de 2025. Esto, transcurridos **10 días hábiles** para emitir la sentencia de tutela, desde su emisión transcurrieron **05 días hábiles** para llevar a cabo la primera notificación de la sentencia de tutela, no siendo hasta después de transcurridos **21 días hábiles** que se efectuó debidamente la notificación a todas las partes, respectivamente.

Observa esta Corporación, según el informe rendido por la doctora Lina Sofía Martínez Salcedo, quien se encontraba en el cargo de jueza, que el 15 de mayo de 2025 se emitió el fallo de la tutela, habiéndose repartido esta el 30 de abril del mismo año, lo cual se encuentra dentro del término establecido en el Decreto 2591 de 1991, por medio del cual disponen que *“Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud el juez dictará fallo (...)”*; esto con anterioridad a la comunicación del requerimiento de informe en el presente trámite.

Se observa que la agencia judicial adelantó la actuación sin que obrara requerimiento por parte de esta Corporación, e inclusive con anterioridad a la presentación de la solicitud de vigilancia judicial administrativa, por lo que no es posible advertir la existencia de una situación de **mora judicial actual**.



Lo anterior, impide seguir adelante con este trámite, pues de los artículos 1° y 6° del Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, “*por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6°, de la Ley 270 de 1996*”, se infiere razonablemente que la finalidad de esta actuación administrativa es procurar por la eficiente prestación del servicio de administración de justicia para casos de sucesos de mora presentes, no en los pasados. Así, será del caso ordenar el archivo del presente trámite administrativo, respecto a la doctora Lina Sofía Martínez Salcedo, por cuanto se trata de hechos pasados.

No obstante, observa esta corporación, de lo informado por los servidores judiciales, que si bien se emitió el fallo de la tutela dentro del término establecido, dentro de los 10 días hábiles, la primera notificación se realizó pasados 05 días hábiles, la cual si bien se realizó con anterioridad a la presente solicitud, contó con un yerro en la notificación dirigida hacia la demandante al momento de digitar su correo electrónico, el cual fue subsanado pasados **21 días hábiles**. Esto, con posterioridad a la comunicación del requerimiento de informe realizado por esta Corporación el 11 de junio de la presente anualidad. Por lo que, bajo ese entendido, deberán de analizarse las situaciones que llevaron a ello.

De lo anterior, y antes de entrar a dicho análisis, cabe señalar sobre que la agencia judicial supero el término establecido en el Decreto 2591 de 1991, en el cual versa lo siguiente:

“ARTICULO 30: NOTIFICACIÓN DEL FALLO. El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido.”

La anterior situación resulta más reprochable comoquiera que se está ante un trámite de naturaleza constitucional que reviste de prioridad; esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 2591 de 1991, a saber:

“ARTICULO 15. TRAMITE PREFERENCIAL. La tramitación de la tutela estará a cargo del juez, del presidente de la sala o magistrado a quien éste designe, en turno riguroso, y será sustanciada con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de hábeas corpus.

Los plazos son perentorios e improrrogables”.

Respecto al error involuntario en la notificación en la sentencia de tutela, aducido por los doctores Álvaro Quintero González y Henry Omar Castellón Vásquez, oficial mayor y secretario, esta Corporación observó en las pruebas presentadas la confusión del correo electrónico de la accionante, toda vez que el preciso era ezambranov@hotmail.com y no ezambrano@hotmail.com. No obstante, se le recuerda a los servidores judiciales lo



mencionado por la Corte Suprema de Justicia el 23 de febrero 2011, dentro del proceso con radicado 35792, respecto a los yerros en las notificaciones:

(...)

Como viene de verse, si bien se presentaron serias irregularidades en el proceso de notificación del fallo de segunda instancia y en la interposición del recurso, lo cierto es que tales yerros no le pueden ser atribuidos a las partes en estricto acatamiento a las garantías constitucionales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y el principio de buena fe, los que han de ser ponderados en cada caso por el funcionario judicial, sin que quepa en esta apretada tesis lo referido a las meras constancias secretariales (distinción necesaria) en la medida en que frente a estas últimas ha sido pacífica la postura de la Sala en desconocer sus efectos:

(...)

No se trata, como se ve, de una simple constancia secretarial, que es a lo que la Corte se refirió en el antecedente citado por el accionado, sino de un requerimiento legal imperativamente impuesto al secretario, para que obre positivamente, es decir haciendo7”.

Dígase entonces, que la notificación es el acto mediante el cual se pone en conocimiento de los sujetos procesales el contenido de las providencias que se produzcan dentro del proceso, que su finalidad consiste en garantizar los derechos de defensa y de contradicción como nociones integrantes del concepto de debido proceso y que a su vez permite establecer el momento en que empiezan a correr los términos procesales (...).

(...)”

En atención a que nos encontramos frente a una acción de carácter constitucional, por lo que su prevalencia debe ser acogida en todos los aspectos.

Según lo expuesto por la doctora Lina Sofía Martínez Salcedo, una vez que se emitió el fallo de la tutela y se adjuntó al expediente en One Drive, paso a remitirlo al empleado encargado para su notificación inmediata, quien en el presente caso se trata del doctor Álvaro Quintero González, como se vislumbra en pantallazo adjunto dentro del informe rendido.



CONSTITUCIONAL PARA NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Desde Lina Sofia Martinez Salcedo <lmartins@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Fecha Vie 16/05/2025 8:00

Para Alvaro Quintero Gonzalez <aquinterog@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

2025-00177-00 Sentencia de tutela.pdf; 2025-00176-00 Sentencia de tutela.pdf; 2025-00175-00 Sentencia de tutela.pdf;

Cabe resaltar, respecto del deber legal que tiene el secretario, o el funcionario que haga sus veces, sobre las comunicaciones en las actuaciones judiciales, según lo estipulado en la Ley 2213 de 2022 que versa:

“ARTÍCULO 11. COMUNICACIONES, OFICIOS Y DESPACHOS. Todas las comunicaciones, oficios y despachos con cualquier destinatario, se surtirán por el medio técnico disponible, como lo autoriza el artículo 111 del Código General del Proceso.

Los secretarios o los funcionarios que hagan sus veces remitirán las comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a las ordenes judiciales mediante mensajes de datos, dirigidas a cualquier entidad pública, privada o particulares (...)

De lo anterior, se tendrá que si bien la responsabilidad sobre comunicar las ordenes judiciales recae sobre el secretario, en el caso sub examine, dicha responsabilidad fue delegada en el doctor Álvaro Quintero González, oficial mayor, como se vislumbra en los adjuntos dentro del informe rendido bajo gravedad de juramento por parte de la doctora Lina Sofía Martínez Salcedo, anterior jueza de la agencia judicial requerida.

Por lo que, comoquiera que no existe justificación razonable para la mora de 5 días hábiles para tramitar la primera notificación de la sentencia desde su emisión, y de 21 días hábiles para la subsanación del yerro en la notificación, esta seccional tuvo conocimiento de hechos constitutivos de una posible falta disciplinaria, por lo que será del caso ordenar la compulsión de copias con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar para que se investiguen las conductas desplegadas por el doctor Álvaro Quintero González, oficial mayor, respectivamente, del Juzgado 014 Penal Municipal de Conocimiento de Cartagena, dentro del trámite bajo estudio; esto en cumplimiento de la obligación legal que recae sobre esta seccional, conforme lo previsto en el artículo 87 de la Ley 1952 de 2019.

“(...) ARTÍCULO 87. OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta

Cartagena de Indias D.T. y C., Centro Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: mecsjbolivar@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia



disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.

Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva (...)”.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

III. RESUELVE

PRIMERO: Archivar la solicitud de vigilancia judicial administrativa por la señora Elsy Zambrano Velásquez, en calidad de parte, dentro de la acción constitucional con radicado No. 13-001-40-09-014-2025-00-176-00, que cursa en el Juzgado 014 Penal Municipal de Conocimiento de Cartagena, por las razones anotadas.

SEGUNDO: Compulsar copias de la presente actuación con destino a la Comisión Sección de Disciplina Judicial de Bolívar para que, en atención a lo anotado, investiguen las conductas desplegadas por el doctor Álvaro Quintero González, oficial mayor del Juzgado 014 Penal Municipal de Conocimiento de Cartagena, en el trámite del proceso de marras, conforme al ámbito de su competencia.

TERCERO: Notificar la presente decisión a la solicitante, así como a los doctores Lina Sofía Martínez Salcedo, Álvaro Quintero González y Henry Omar Castellón Vásquez, antigua juez, oficial mayor y secretario, respectivamente, del Juzgado 014 Penal Municipal de Conocimiento de Cartagena.

CUARTO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma Corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
Presidencia

IVÁN EDUARDO LATORRE GAMBOA
Presidente

CP. LRCC/CGSS

Cartagena de Indias D.T. y C., Centro Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.
Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co
Correo electrónico: mecsjbolivar@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cartagena – Bolívar. Colombia